

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto interlocutorio –segunda instancia-

Santiago de Cali, tres (3) de julio de dos mil veinte (2020)

Radicación No : 76001-33-33-0012-2018-00156-01
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante : ARMANDO GONZÁLEZ CRUZ
Demandado : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE

Magistrado Ponente: FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

Procede la Sala Segunda Jurisdiccional de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra el numeral segundo del auto interlocutorio No. 768 del 3 de octubre de 2018, por el cual el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali, rechazó parcialmente la demanda.

AUTO APELADO.

Mediante numeral segundo del auto interlocutorio No. 768 del 3 de octubre del 2018¹ el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali, rechazó la demanda en cuanto al reconocimiento prestaciones sociales derivadas de un contrato realidad, con base en que el libelo se presentó después de los cuatro (4) meses de haberse emitido el Oficio No. 0320471352017 del 27 de julio de 2017, por el cual la CVC, respondió negativamente la petición de reconocimiento de la relación laboral entre las partes, sin que se haya logrado interrumpir la configuración de la caducidad, después de la reanudación de términos tras declararse fallida la conciliación prejudicial celebrada ante la Procuraduría Judicial Delegada ante los Juzgados.

RECURSO DE APELACIÓN.

Inconforme con la decisión anterior la parte actora decidió recurrirla en apelación², argumentando que el acto administrativo fue recibido por la portería del “Edificio Centro Comercial y Profesional Centenario I” el 4 de agosto de 2017 y sólo el martes 8 de agosto de

¹ Folios, 71-74.

² Folios, 76-83.

ese año le fue entregado a la secretaria de la oficina, dado que el lunes 7 de agosto de 2017 era festivo y no atiende los fines de semana.

Por lo que, en su criterio no ha operado la caducidad porque este fenómeno procesal empieza a correr desde el 9 de agosto de 2017 y, a partir de esa fecha puede concluirse que la demanda se presentó oportunamente. Por lo anterior, pide el apelante que, se revoque el auto que rechazó parcialmente la demanda y, en su lugar, se disponga sobre la admisión de la demanda.

Transcribe íntegramente las sentencias de tutela T-404 de 2014 y T-051 de 2016, proferidas por la Corte Constitucional, que estima son precedentes jurisprudenciales aplicables al caso *sub-lite*.

CONSIDERACIONES.

1. Competencia.

Este Tribunal es competente para desatar el recurso de apelación incoado contra el auto mediante el cual se rechazó parcialmente la demanda, conforme al numeral 3º del artículo 243 del CPACA.

2. Problema jurídico.

Se plantea así:

¿Ha operado la caducidad del medio de control presentado contra el acto administrativo por medio del cual la CVC, respondió negativamente la petición de reconocimiento de prestaciones sociales derivadas la relación laboral, elevada por el señor Armando González Cruz?

3. Marco normativo.

El literal d) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, señala que “cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.

Pero, el literal c) del numeral 1º del artículo 164 *ibídem*, consagra una excepción a esa regla general, consistente en que la demanda se podrá presentar en cualquier tiempo “cuando se

dirija contra actos que reconozcan o nieguen totalmente o parcialmente **prestaciones periódicas**".

Sobre el alcance de la expresión "prestaciones periódicas", contenida en el enunciado literal, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en auto del 8 de septiembre de 2017³, precisó que se aplica a aquellas que tienen vocación de permanecer en el tiempo como por ejemplo las pensiones.

Pero, no ha negado que tal concepto sea aplicable, también, a aquellos emolumentos derivados de una relación laboral, bajo el entendido de que el concepto general de "prestaciones" corresponde a toda obligación de naturaleza laboral con la característica de ser periódica, incluido el salario, las primas de carácter salarial etc., razón por la cual los actos administrativos, relacionados con reclamaciones de esa naturaleza, no son susceptibles de ser cobijados por la caducidad.

Igualmente, el Alto Tribunal⁴, ha entendido que las reclamaciones de naturaleza laboral, tratándose de peticiones relacionadas con el reconocimiento de acreencias de carácter salarial, no están sujetas al término de caducidad de cuatro meses previsto para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando quien pretenda su pago siga teniendo vínculo laboral con la entidad que pretende demandar, pues terminado éste, no es posible hablar de periodicidad del pago y, en esa medida, su exigibilidad vía judicial está sometida al término de caducidad general del medio de control incoado.

Bajo ese panorama normativo y jurisprudencial puede afirmarse que las demandas que persigan el reconocimiento y pago de prestaciones sociales deberán presentarse dentro del término de los cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo, salvo cuando se trate de prestaciones periódicas vitalicias o cuando siga vigente la relación laboral.

4. Caso concreto.

El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, declaró comprobada la caducidad de la acción porque la demanda se presentó cuatro meses después de haberse emitido el acto por el cual la CVC, respondió negativamente la petición de reconocimiento de prestaciones sociales derivadas de la relación laboral, existente entre las partes aquí en contienda.

³ Expediente: 760012333000201601293 01 Número interno: 4218 – 2016, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

⁴ Ver nota 3.

El actor apeló aduciendo que, el acto administrativo sólo le fue notificado el 8 de agosto de 2017, cuando éste fue entregado por la Portería del “Edificio Centro Comercial y Profesional Centenario I” a la secretaria de su oficina.

Para dilucidar lo anterior, la Sala se referirá al término de caducidad que debe aplicarse en este caso y luego al material probatorio que permita establecer si la demanda se presentó en forma extemporánea.

Sea lo primero indicar que en el caso de autos no es viable aplicar lo previsto por el CPACA en su artículo 164.1 literal c), que establece que la demanda deberá ser presentada en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, por cuanto, cuando se pretende el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de un contrato realidad, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho debe ser presentada dentro de la oportunidad de ley, esto es, dentro de los cuatro meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo que definió la situación particular y concreta.

Claro ese punto y revisada la prueba documental, este operador judicial encuentra por medio del Oficio No. 0320-471352017 del 27 de julio de 2017⁵ la CVC negó las prestaciones sociales producto del pretense contrato realidad, reclamadas por parte del señor Armando González Cruz.

Igualmente está demostrado que, ese acto administrativo le fue notificado el 4 de agosto de 2017⁶.

De allí que, a partir del día siguiente empiezan a correr los términos de caducidad de que trata el literal d) del numeral 2º del artículo 164 porque cualquier inconformidad que hubiera tenido el demandante con el acto administrativo que negó la existencia de la relación laboral debió alegarla ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dentro de los 4 meses siguientes a su notificación.

No se acoge la tesis del apelante referente a que el acto administrativo sólo le fue notificado el 8 de agosto de 2017, cuando éste fue entregado por la Portería del “Edificio Centro Comercial y Profesional Centenario I” a la secretaria de su oficina.

Lo anterior en razón a que el CPACA, contempla varias formas de notificación. Una de estas es la notificación personal y otra es la notificación mediante el envío de copia de la providencia o

⁵ Folios, 52-53.

⁶ Folio 69.

actuación respectiva, por correo, bien sea por la red oficial o mediante el uso de cualquier servicio de mensajería especializada.

Si se aceptara la tesis planteada en la apelación de que el envío por correo debe ser entregado personalmente al demandante o a la persona autorizada por este para recibir notificaciones, se llegaría a la conclusión de que la notificación por correo y la personal son idénticas. Es más, en estricto sentido, la notificación por correo terminaría siendo “*más personal*” que la notificación personal misma, ya que en esta última es el interesado quien debe desplazarse a las oficinas de la entidad a notificarse, al paso que en la notificación por correo – como la entiende la demandante- sería el empleado del correo oficial o de la empresa de mensajería quien debería acudir a la dirección del demandante, buscarlo y entregarle personalmente copia de la actuación.

En efecto, así como se alega que el portero del edificio en el que se encuentra ubicada la oficina del demandante no estaba autorizado para recibir correspondencia a nombre de éste, podría alegarse válidamente que un dependiente, o la secretaria, o el auxiliar o cualquiera de los empleados del demandante, no estaban tampoco autorizados para recibir notificaciones a su nombre.

Por ende, solamente el demandante podría ser receptor directo de la correspondencia dirigida a su oficina. Como se puede apreciar, la tesis expuesta en la apelación conduce a conclusiones contrarias al espíritu de las normas que regulan el tema de las notificaciones y que, de aceptarse, fácilmente producirían un grado de dificultad extrema en el trámite de las actuaciones administrativas.

Para la Sala, la interpretación de las normas que regulan las notificaciones debe consultar la necesidad de garantizar el derecho de defensa de los interesados pero sin hacer imposible el trámite de la actuación.

Si el CPACA permite que se haga la notificación mediante cualquier servicio de mensajería especializada debe analizarse si la forma en que regularmente funciona dicho servicio es suficiente garantía para el derecho de defensa del contribuyente. Lo usual en el tráfico ordinario de la actividad de correos es que, cuando se trata de oficinas ubicadas en propiedad horizontal en la que exista una portería, los envíos postales sean entregados a la persona encargada de atender dicha portería.

De hecho, la portería tiene siempre dispuesto un espacio físico para la recepción, clasificación y entrega de la correspondencia⁷.

De manera que, la conclusión obligada es que el acto administrativo que negó la existencia de un contrato realidad se entiende notificado desde el 4 de agosto de 2017, día en que fue entregado en la portería del “Centro Profesional y Comercial el Centenario I”. Luego los términos de caducidad empiezan a correr a partir del día siguiente y, finalizarían el 5 de diciembre de 2017.

No obstante, el extremo activo de la relación procesal elevó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos, el 13 de octubre de 2017⁸, suspendiéndose el término de caducidad, según lo previsto en el Art. 21 de la Ley 640 de 2.001.

Como en tal diligencia que se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2017⁹, las partes no llegaron a ningún acuerdo, se declaró fallida y, la Procuraduría Judicial expidió la respectiva constancia, ese mismo día¹⁰.

De donde se sigue que, a partir del día siguiente se reanudó el término a que se refiere el literal i) del artículo 164-2 del CPACA, y, este concluiría luego de los cincuenta y tres (53) días que le restaban al actor para incoar la demanda, vale decir, el 20 de enero de 2018. Pero como se trata de un día inhábil se corre hasta el día hábil inmediatamente siguiente, es decir, 22 de enero de 2018.

Como la demanda se impetró el 23 de enero de 2018¹¹, la Sala, puede afirmar que, al momento de su presentación, este medio de control se encontraba caducado y, por tal razón, es evidente que es extemporánea cualquier reclamación que persiga el pago de prestaciones sociales derivadas del contrato realidad.

Tal estado de cosas impone confirmar el numeral segundo del auto por medio del cual se rechazó la demanda frente al reconocimiento de prestaciones sociales derivadas de un contrato realidad por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control incoado.

⁷ Sobre el tema de notificaciones puede verse al respecto el auto del 18 de junio de 2014, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, radicación No. 66001-23-33-000-2012-00041-01(20088), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

⁸ Folio, 47.

⁹ Folio, 47.

¹⁰ Folio, 72.

¹¹ Acta individual de reparto visible a folio, 56.

as

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMASE el numeral segundo (2) del auto interlocutorio No. 768 del 3 de octubre de 2018, por el cual el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali, rechazó la demanda frente al reconocimiento de prestaciones sociales derivadas de un contrato realidad, por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control incoado, acorde con lo expuesto.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Providencia discutida y aprobada en sesión de hoy. Acta No. **034**

Los Magistrados,


FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ,


RONALD OTTO CEDENO BLUME


JHON ERICK CHAVES BRAVO

29JUL2020am7:09 TAV-1